

**Puerto Montt, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.**

**Vistos, Oídos y Considerando:**

**Primero:** Comparece ante este Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt en **causa Rit O-488-2020** el abogado don VICTOR MANUEL ACHIARDI LEON, en representación de don JOSE DANIEL CARCAMO FLOS, trabajador social, Run N° 17.658.202-2, domiciliado en calle Puqueldón N° 1494, Población Volcán Calbuco, sector Alerce Sur de la comuna de Puerto Montt, y para estos efectos en calle Antonio Varas 216, oficina 1103 de la ciudad de Puerto Montt, e interpone demanda conforme al procedimiento de aplicación general laboral, por nulidad de despido, despido injustificado, indemnización de perjuicios por lucro cesante y 2 cobro de prestaciones laborales, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, Rut: 69.220.100-0, del giro de su denominación, representada legalmente por don Gervoy Paredes Rojas, alcalde, Rut: 10.065.018- 5, ambos domiciliados en San Felipe N° 60, comuna de Puerto Montt, a fin de que se declare que el despido del cual fue objeto su representado es injustificado y además nulo ante el incumplimiento de la demandada en materia de pago de cotizaciones previsionales, y, en consecuencia, se obligue a la demandada al pago de la indemnización de perjuicios por lucro cesante y las prestaciones laborales que señala, de conformidad con los argumentos de hecho y fundamentos de derecho que pasa a exponer:

Señala que el 1 de junio de 2020, su representado suscribió un contrato de honorarios denominado como contrato de prestación de servicios de honorarios en programas comunitarios y fondos extra presupuestarios, pactado a plazo fijo venciendo el día 31 de octubre de 2020.

Relata que según el tenor del citado contrato, la municipalidad de Puerto Montt, a través de la dirección de desarrollo comunitario y en el marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, denominado como “programa noche digna”, plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7 encomendó a su representado las siguientes labores, todas ellas bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios de honorarios: 1) asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y evaluación a las que se le convoque. 2) Vela (sic) por la realización adecuada de las actividades con participantes y otras instituciones u organismos externos. 3) Responsable del orden, ambiente, cordialidad en los comedores a la entrega de las cenas y desayunos, 4) Recepcionar, registrar administrativamente y distribuir a los usuarios en los dormitorios, 5) Apoyar al encargado en las distintas actividades e iniciativas grupales, así como también en realizar intervenciones individuales y grupales en situación de crisis y conflictos que se puedan presentar. 6) Entregar y



sugerir al responsable del programa indicaciones que va en provecho de la administración del albergue 24/7. 7) Mantener absoluta confidencialidad de la información que en el desarrollo de su labor recabe, conozca, reciba y o registre en cada una de las personas atendidas, limitándose únicamente a manejarla y entregarla a las instancias determinadas por el programa, durante la vigencia de su contrato y posterioridad a la finalización del mismo, desempeñar su labor respetando absolutamente las concepciones políticas, religiosas y filosóficas de las personas que atienda, absteniéndose de emitir cualquier juicio público o privado sobre ellas, evitando cualquier tipo de proselitismo.

Indica que además, se escrituró un numeral octavo en que se pactaba la jornada de trabajo. “8) Las funciones se llevan a cabo en dependencia del Instituto nacional del deporte calle maratón esquina Egaña-de lunes a domingo de 09:00 horas a 18:00 horas y de 18:00 A.M. a 09:00 A.M. de la mañana con turnos en el cual el técnico tendrá que alojarse cuatro o tres veces por semana acuerdo al calendario de turno que se establezca”.

Asevera que por este contrato se pactó el pago de una suma de \$2.800.000, impuestos incluidos pagaderos en 5 cuotas mensuales, según un cuadro que se aprecia en el mismo contrato con un pago mensual de \$560.000, abarcando el periodo del 1 de junio a 30 de junio, 1 de julio al 30 de julio, 1 de agosto al 31 de agosto, 1 de septiembre al 30 de septiembre y 1 de octubre al 31 de octubre de 2020.

Expresa que el contrato era ejecutado bajo la supervisión de la directora de la dirección de desarrollo comunitario o subrogante legal.

Aduce que en la cláusula quinta del contrato se estipulaba que ante el incumplimiento de obligaciones emanadas del mismo por parte del técnico, así como los errores y deficiencias en la calidad de sus servicios, era causal suficiente para la que la municipalidad ponga término al mismo sin forma de juicio y mediante decreto exento.

Asimismo, el municipio se reservó el derecho al término anticipado del contrato sin expresión de causa y previo aviso formulado a la contraparte con 15 días de anticipación sin derecho a indemnización de ningún tipo, en este último caso el técnico recibiría como pago los honorarios correspondientes a los servicios prestados lo que sería certificado por la directora de la dirección de desarrollo comunitario.

Afirma que también se facultaba al técnico para ausentarse de sus funciones producto de licencia médica, no obstante por los días en que la persona se encuentre con licencia médica el servicio no estaría obligado al pago sus honorarios, cancelándose sólo la diferencia que conforme a la ley no quede



cubierta por el subsidio de incapacidad la cual tenga derecho por su sistema de salud se estipulaba además que para lo anterior la persona debía presentar ante el servicio dentro de las 72 horas siguientes contadas desde el inicio del reposo la correspondiente licencia médica en original.

Refiere que se estipulaba que el convenio (contrato de honorarios) tendría vigencia desde el 1 de junio al 31 de octubre de 2020 y se le aplicaban, además, las causales de inhabilidades e incompatibilidades administrativas de los artículos 54, 55 y 56 de la ley 18.575. Se agregaba, que el técnico no sería considerado como funcionario municipal para ningún efecto legal y que la relación de prestación de servicios no constituiría vínculo laboral para los efectos previstos en el código del trabajo. Por último, se estipulaba que el técnico debía dar cumplimiento a la norma sobre pago de cotizaciones previsionales y sus modificaciones teniendo presente que toda persona natural, que ejerce individualmente una actividad mediante la cual obtiene renta grabada por el artículo 42 n° 2 de la ley sobre impuesto a la renta deberá cotizar al sistema provisional de pensiones, de salud y de accidente del trabajo siendo de su exclusividad dicho pago.

Precisa que su remuneración, para efectos del artículo 172 y 162 del Código del Trabajo, ascendía a la suma de \$560.000.

Relata que el contrato se encuentra suscrito sobre la base de una supuesta prestación de servicios a honorarios, sin embargo, en los hechos existió una relación laboral, al tenor de lo dispuesto en el artículo 7 y 42 del Código del Trabajo.

Agrega que el 1 de septiembre de 2020, su representado recibió un correo electrónico de don Luis Gómez Vera, coordinador Albergue 24/7, en que informaba que a contar de aquella fecha no se continuaría con sus servicios, según la misiva: *“por no ajustarse a los parámetros del manual de orientaciones y estándares técnicos para plan de invierno, como lo es realizar registro diario de las personas atendidas y prestaciones entregadas en el SDN, el de no apoyo colaborativo a los demás profesionales del equipo albergue 24/7 saliendo con usuario sin aviso del coordinador siendo que el usuario fue citado para hacer otras actividades dentro del dispositivo, el no respetar cláusula N° 1 del contrato de trabajo que estipula el asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y de evaluación a las que se le convoca y por no tener una buena relación interpersonal con sus 5 demás compañeros de trabajo”*. Expresa que este documento no es otra cosa que un despido del cual fue objeto su representado.

Añade que no se le entregó ninguna carta de término del contrato, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo.



Además, conforme la naturaleza de la contratación las cotizaciones previsionales no fueron pagadas en los entes previsionales correspondientes; los cuales corresponden a Fonasa, AFP Modelo y AFC Chile.

Hace presente que no se presentó reclamo ante la Inspección del Trabajo, pues al tratarse el empleador de un servicio público, la IPT no recibió el reclamo, más aún por la naturaleza de la relación que da cuenta el convenio a honorarios, siendo materia necesariamente de resolución judicial.

Argumenta enseguida en torno a la naturaleza de la contratación, citando la normativa y jurisprudencia que invoca en su favor

Pidiendo en definitiva declarar: Que se declara la existencia de una relación laboral entre su representado y la I. Municipalidad de Puerto Montt, como Técnico, formando parte del programa Noche Digna y que este contrato de trabajo era a plazo fijo entre el día 01 de junio de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020. Que el actor fue despedido de manera injustificada el día 1 de septiembre de 2020. Que su remuneración mensual ascendía a la suma de \$560.000. Que al momento del término del contrato las cotizaciones previsionales no se encontraban pagadas en las instituciones previsionales correspondientes, y que son Fonasa, AFC Chile y AFP Modelo. Que se le adeuda feriado legal y proporcional. Que en razón de lo anterior la demandada deberá pagar las prestaciones laborales que indica, todo con los reajustes, intereses y las costas del juicio.

**Segundo:** Que contestó la demanda el abogado don EGIDIO MAURICIO CÁCERES LAGENBACH, en representación de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, solicitando su rechazo, con costas, por los siguientes argumentos de hecho y de derecho que pasa a exponer:

Expone que efectivamente José Daniel Cárcamo Flos prestó servicios, bajo la modalidad jurídica “a honorarios” durante el año 2020, desde el 1° de junio de 2020 y hasta la fecha de su 2° término el 1 de septiembre de 2020. Efectivamente “el convenio” contemplaba, plazo de vigencia, hasta el 31 de octubre de 2020.

Indica que las labores o cometidos específicos, se relacionaban con la ejecución exclusiva del “programa noche digna, componente 1: plan de invierno para personas en situación de calle, año 2020 para la región de los Lagos”, todo ello, en virtud del programa de transferencia de recursos de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia región de los Lagos suscrito con fecha 15 de mayo de 2020. Lo anterior en su calidad de técnico y experto, en su calidad de trabajador social, y para el cumplimiento, de funciones específicas.

Sostiene que la señalada Modalidad de contratación es reconocida y autorizada por la Ley N° 18.883 Estatuto Administrativo Para Funcionarios Municipales.



Hace presente que, el “programa noche digna, componente 1: plan de invierno para personas en situación de calle, año 2020 para la región de los Lagos”, no es de carácter permanente, y por ello, es evaluado año a año por motivos de carácter técnico y presupuestario.

Refiere que evidentemente, la materialización del programa, depende de la transferencia de recursos de Ministerio de Desarrollo Social, toda vez que, la Municipalidad no cuenta con recursos propios para su financiamiento.

Afirma que no es efectivo que, se tratara de una relación laboral.

Aduce que los honorarios pactados eran de \$ 560.000 (quinientos sesenta mil pesos) mensuales por un total de \$ 2.800.000 y que no corresponde, fijar base para efectos del 172, toda vez que, no estamos ante una relación de carácter laboral.

Agrega que con anterioridad, la demandante nunca objetó la naturaleza jurídica del contrato o realizó una denuncia administrativa en la Inspección del Trabajo de Puerto Montt o presentó una acción declarativa de reconocimiento de la relación sostenida entre las partes.

Argumenta luego en relación a la naturaleza jurídica de la relación contractual la que -según señala- era una relación a honorarios, de aquellas, permitidas perfectamente por la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

En síntesis, plantea que José Daniel Cárcamo Flos se encontraba contratado, en calidad jurídica a honorarios, en conformidad, a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 18.883 considerando su carácter técnico y cumpliendo labores o cometidos específicos como “a honorarios” para la ejecución del subprograma denominado el “programa noche digna, componente 1: plan de invierno para personas en situación de calle, año 2020 para la región de los Lagos”.

Alega, además, que teniendo presente que, la relación que mantenía la Municipalidad de Puerto Montt con la demandante se encuentra regulada y reglamentada en el artículo 4 de la Ley 18.883, y por tanto, es plenamente legal, no resulta pertinente o necesario realizar un análisis del elemento de “subordinación o dependencia” (se excluye). Por otro lado, conforme a la disposición citada y los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, aquellos contratos, se rigen por sus disposiciones, los cuales, pueden contemplar beneficios de carácter funcionario, a saber, días administrativos, periodos de licencia y feriados, en tanto, no excedan los establecidos por Ley para los funcionarios públicos.



En cuanto a la nulidad del despido, sostiene que, no existiendo relación laboral, no corresponde el pago de obligaciones de carácter previsional alguna, y por tanto, una acción fundamentada en el no pago íntegro u oportuno de las cotizaciones de seguridad social, resulta evidentemente inviable. Por otro lado, alega que la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia en fallos de Unificación de Jurisprudencia ha establecido que, no es posible acceder a la nulidad del despido, argumentando al respecto.

Por último, alega la improcedencia de las prestaciones demandadas, pidiendo en definitiva sea rechazada la demanda en todas sus partes, con costas.

**Tercero:** Que la parte demandante rindió los siguientes medios de prueba:

**Prueba documental :**

- 1) Contrato de honorarios de fecha 1 de junio de 2020.
- 2) Copia de 15 permisos únicos colectivos del trabajador demandante.
- 3) Correo electrónico de fecha 1 de septiembre de 2020, comunicando el término del contrato a honorarios.
- 4) Copias de boletas de honorarios N° 6, 7 y 8 de 2020.

**Exhibición de documentos:**

- 1) Manual de orientaciones y estándar técnico para plan de invierno.
- 2) Copia de las actas de las reuniones técnicas informativas del programa plan de invierno.
- 3) Copia del decreto del Alcalde de Puerto Montt en que se haya nombrado al demandante y autorizado el contrato a honorarios

**Prueba confesional:**

Don **Egidio Cáceres Langenbach** en representación de la demandada, bajo apercibimiento del artículo 454 N°3 del Código del Trabajo.

Señala que se desempeña como Director Jurídico de la Municipalidad desde el 2013. La Dideco saca adelante los programas sociales del municipio. Sabe que se suscribió convenio en el 2020. Sabe que estuvo vigente en el 2020. Desconoce cuantas personas contrató el municipio. La fiscalización está en manos del Ministerio de Desarrollo Social. Ellos deben fiscalizar los programas. La directora de desarrollo comunitario es la que fiscaliza que la trabajadora haya cumplido la labor específica. Se encomendaba a la directora de desarrollo comunitario. Los honorarios los pagaba la Municipalidad con los fondos de desarrollo social.

**Prueba testimonial:**



1).- **Jeniffer Vera Miranda**, monitora social, con domicilio en Pudeto Bajo N° 15, Ancud, jeniffervera92@gmail.com +56966124950.

Señala que conoce al demandante quien era monitor, ella también era monitora. Ambos gestionaban la entrada y retiro de usuarios en situación de calle. El demandante realizaba actividades, ingresos, egresos, tenía que participar llevando a alguien al Hospital. Normalmente rotaban, pero como participaban mujeres, hacían turnos de noche. Los monitores veían la situación de los usuarios. Le pagaban un sueldo. No sabe cuál era el sueldo del demandante.

En el contraexamen señala que el albergue de maratón ya no está funcionando.

**Cuarto:** Que la parte demandada rindió los siguientes medios de prueba:

**Prueba documental:**

1) Curriculum Vitae de don José Cárcamo Flos.

2) Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios por Programas Comunitarios entre don José Daniel Cárcamo Flos y la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt de fecha 01 de junio de 2020.

3) Convenio de transferencia de recursos para la ejecución del programa noche digna, y Decreto N° 5033 de fecha 15 de mayo de 2020 que aprueba el convenio.

**Prueba testimonial:**

1).- **Mario Almonacid Paredes**, 10.799.071-2, Asistente Social, Jefe del Departamento de Programas de Protección Social, Avenida Presidente Ibáñez N° 600, Puerto Montt.

Señala que trabaja para la municipalidad desde 1989. Es jefe de los programas de la Municipalidad. Personalmente no conoce al demandante, pero sabe que trabajó para un programa de la Municipalidad que era albergue para personas en situación de calle se ejecutó en el 2020. Fue un programa que generó el Ministerio de Desarrollo Social por el Covid. El Hogar de Cristo redujo su cobertura y quedaron personas de calle sin albergue. Como municipalidad ejecutaron el programa por 5 meses. Actualmente el programa no se ejecuta. El demandante era monitor de las personas en situación de calle. Había otros monitores, cree que eran tres monitores en total. Los monitores estaban contratados a honorarios. Sus ingresos eran de \$400.00 eran fondos que provenían del Ministerio de Desarrollo Social. La Municipalidad ejecuta el programa que se financiaba con recursos del Ministerio de Desarrollo Social. El programa de calle es un programa nacional que se llama noche digna.



En el contraexamen señala que el encargado era Luis Gómez Vera que era el supervisor del recinto. Era la persona a cargo de ver que hubiera agua potable, gas, velar que se cerraran los ingresos. Estaba especialmente para albergue. No hay jefatura.

**Quinto:** Que, valorada la prueba rendida, conforme a las reglas de la sana crítica se establece lo siguiente:

1.- Que el 1 de junio de 2020, el demandante ingresó a prestar servicios para la Municipalidad demandada.

Este es un hecho que no ha controvertido la demandada y que se establece, además, del contrato de prestación de servicios de honorarios suscrito por ambas partes del juicio.

2.- Que la Municipalidad de Puerto Montt, contrató al demandante en el marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, denominado como “programa noche digna”, componente: Plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7.

Este es un hecho no controvertido. Así también se estipula en la cláusula primera del contrato de prestación de servicios de honorarios incorporado al juicio.

3.- Que las funciones que debía desempeñar el demandante eran las siguientes:

a) asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y evaluación a las que se le convoque.

b) Vela (sic) por la realización adecuada de las actividades con participantes y otras instituciones u organismos externos.

c) Responsable del orden, ambiente, cordialidad en los comedores a la entrega de las cenas y desayunos,

d) Recepcionar, registrar administrativamente y distribuir a los usuarios en los dormitorios,

e) Apoyar al encargado en las distintas actividades e iniciativas grupales, así como también en realizar intervenciones individuales y grupales en situación de crisis y conflictos que se puedan presentar.

f) Entregar y sugerir al responsable del programa indicaciones que va en provecho de la administración del albergue 24/7.

g) Mantener absoluta confidencialidad de la información que en el desarrollo de su labor recabe, conozca, reciba y o registre en cada una de las personas atendidas, limitándose únicamente a manejarla y entregarla a las instancias determinadas por el programa, durante la vigencia de su contrato y





posterioridad a la finalización del mismo, desempeñar su labor respetando absolutamente las concepciones políticas, religiosas y filosóficas de las personas que atienda, absteniéndose de emitir cualquier juicio público o privado sobre ellas, evitando cualquier tipo de proselitismo.

Lo anterior consta en la cláusula primera del del contrato de prestación de servicios de honorarios incorporado al juicio. En este mismo sentido declara la testigo **Jeniffer Vera Miranda** presentada por el demandante, corroborando que esas eran las funciones que desempeñaba el actor, en su calidad de monitor.

4.- Que el demandante cumplía sus funciones en dependencia del Instituto Nacional del Deporte calle maratón esquina Egaña, en Puerto Montt, de lunes a domingo de 09:00 horas a 18:00 horas y de 18:00 A.M. a 09:00 A.M. de la mañana con turnos en el cual el técnico tendrá que alojarse cuatro o tres veces por semana acuerdo al calendario de turno que se establezca.

Este es un hecho que no ha controvertido expresamente la demandada y que estipulado, además, en el numeral octavo de la cláusula primera del contrato de prestación de servicios de honorarios. En este mismo sentido declaró la testigo **Jeniffer Vera Miranda**, que normalmente rotaban, pero como participaban mujeres, el demandante hacía turnos de noche.

5.- Que el demandante percibía como contraprestación por sus servicios un pago mensual de \$560.000.

Este es un hecho que se establece en base a las boletas a honorarios incorporadas en el juicio, desprendiéndose de estas que ese fue el monto que percibió en los meses de junio, julio, y agosto de 2020. Así también quedó estipulado en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios de honorarios en el cual se indica que el Municipio pagará al demandante la suma total de \$2.800.000, impuestos incluidos pagaderos en 5 cuotas mensuales, según un cuadro que se aprecia en el mismo contrato con un pago mensual de \$560.000, abarcando el periodo del 1 de junio a 30 de junio, 1 de julio al 30 de julio, 1 de agosto al 31 de agosto, 1 de septiembre al 30 de septiembre y 1 de octubre al 31 de octubre de 2020.

6.- Que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios de honorarios, el contrato era ejecutado bajo la supervisión de la directora de la dirección de desarrollo comunitario o subrogante legal.

Este es un hecho que también reconoce don **Egidio Cáceres Langenbach** en la diligencia de absolución de posiciones en representación de la demandada, al señalar que la Directora de Desarrollo Comunitario era la encargada de fiscalizar que el trabajador haya cumplido la labor específica.



7.- Que de acuerdo a la cláusula sexta del contrato el demandante podía ausentarse de sus funciones producto de licencia médica, no obstante por los días en que la persona se encuentre con licencia médica el servicio no estaría obligado al pago sus honorarios, cancelándose sólo la diferencia que conforme a la ley no quede cubierta por el subsidio de incapacidad la cual tenga derecho por su sistema de salud se estipulaba además que para lo anterior la persona debía presentar ante el servicio dentro de las 72 horas siguientes contadas desde el inicio del reposo la correspondiente licencia médica en original.

8.- Que el contrato tenía vigencia desde el 1 de junio de 2020 al 31 de octubre de 2020.

Lo anterior consta en la cláusula séptima del contrato de prestación de servicios de honorarios suscrito por las partes

9.- Que el 1 de septiembre de 2020, la demandada puso término a la contratación del actor mediante correo electrónico informándole que a contar de esa fecha no se continuaría con sus servicios.

En efecto consta en el referido correo electrónico de 1 de septiembre de 2020, que don Luis Gómez Vera, coordinador Albergue 24/7, le informa que a contar de esa fecha no se continuaría con sus servicios: *“por no ajustarse a los parámetros del manual de orientaciones y estándares técnicos para plan de invierno, como lo es realizar registro diario de las personas atendidas y prestaciones entregadas en el SDN, el de no apoyo colaborativo a los demás profesionales del equipo albergue 24/7 saliendo con usuario sin aviso del coordinador siendo que el usuario fue citado para hacer otras actividades dentro del dispositivo, el no respetar cláusula N° 1 del contrato de trabajo que estipula el asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y de evaluación a las que se le convoca y por no tener una buena relación interpersonal con sus 5 demás compañeros de trabajo”*.

10.- Que la Municipalidad de Puerto Montt, no pagó cotizaciones previsionales al actor.

Este es un hecho que quedó como no controvertido según el acta de la audiencia preparatoria.

**En cuanto a la naturaleza jurídica de la relación contractual entre las partes.**

**Sexto:** Que don José Daniel Cárcamo ha interpuesto demanda ante este Juzgado de Letras del Trabajo para que se califique como laboral la relación contractual con la Municipalidad de Puerto Montt, expresando que, al prestar sus servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia, existe una relación laboral y no de carácter civil, independientemente de la denominación del contrato.



Por su parte, la demandada controvierte la existencia de una relación laboral entre las partes, expresando que se vinculó con el demandante bajo el régimen a honorarios y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

**Séptimo:** Que conforme a lo anterior la controversia se centra en determinar si en la especie concurren o no los requisitos señalados en el artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que permite la contratación de personas en base a honorarios, lo que implica dilucidar si la contratación de las demandantes se encuentra dentro del marco legal que establece el artículo 4 que autoriza a la Administración contratar bajo el régimen de honorarios y si se ajusta a las condiciones que dicha norma describe.

**Octavo:** Que el citado artículo 4 de la Ley 18.883, regula la contratación de personal a honorarios de la siguiente manera:

*"Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.*

*Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.*

*Las personas contratadas a honorarios se registrarán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto".*

**Noveno:** Que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 4, la Administración podrá contratar sobre la base de honorarios en tres casos.

1.- A Profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, en la medida que se requieran para realizar labores que cumplan con las características de **accidentales y no habituales** de la institución.

2.- A Extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, que debe hacerse del mismo modo anterior; y

3.- Cuando requiera la prestación de servicios para **cometidos específicos**.

**Décimo:** Que de lo reseñado en el considerando anterior se colige que para verificar si la contratación del demandante se encuentra dentro del marco legal que establece el artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales debemos atender entonces a la forma en que se prestaron los



servicios, el tipo de servicios prestados y en particular, su especificidad y temporalidad.

**Undécimo:** Que como quedara asentado en el considerando quinto, la Municipalidad de Puerto Montt, contrató al demandante a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario en el marco del modelo de intervención para personas en situación de calle, denominado como “Programa Noche Digna”, componente: Plan de invierno para las personas en situación de calle, año 2020 albergue 24/7.

También quedó establecido que el demandante tenía, entre otras funciones, asistir a las reuniones técnicas informativas, de coordinación y evaluación a las que se le convoque, velar por la realización adecuada de las actividades con participantes y otras instituciones u organismos externos, responsable del orden, ambiente, cordialidad en los comedores a la entrega de las cenas y desayunos, recepcionar, registrar administrativamente y distribuir a los usuarios en los dormitorios, apoyar al encargado en las distintas actividades e iniciativas grupales, así como también en realizar intervenciones individuales y grupales en situación de crisis y conflictos que se puedan presentar, entregar y sugerir al responsable del programa indicaciones que va en provecho de la administración del albergue 24/7.

Se dejó asentado, además, que la prestación de servicios debía efectuarse en dependencia del Instituto Nacional del Deporte calle maratón esquina Egaña, en Puerto Montt, cumpliendo un horario de trabajo y sujeto a un sistema de turnos dispuesto por la municipalidad demandada, destacándose que el contrato era ejecutado bajo la supervisión de la directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario o subrogante legal.

También se estableció que se le reconoció al demandante el derecho a ausentarse de sus funciones producto de licencia médica, cancelándose la diferencia de los días que no queden cubiertos por el subsidio de incapacidad, para lo cual debía presentar ante el servicio dentro de las 72 horas siguientes contadas desde el inicio del reposo la correspondiente licencia médica en original.

**Duodécimo:** Que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695, en su artículo 1 inciso 2° establece lo siguiente:

“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.”

Por su parte el artículo 3 señala que: “Corresponderá a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, las siguientes funciones privativas:

c) La promoción del desarrollo comunitario.”



En tanto el artículo 4 estipula que: “Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con:

c) La asistencia social y jurídica;

j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad;

l) El desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local.”

**Décimo Tercero:** Que del análisis conjunto de la normativa reseñada precedentemente y el carácter del contrato a honorario suscrito entre las partes, se colige que se trata de una modalidad a través de la cual la Municipalidad demandada cumple sus fines normativos, habida consideración que su finalidad era la de desempeñarse en un plan o programa denominado como “Noche Digna”, y cuyo objeto eran personas en situación de calle las cuales por esta vía acceden a servicios sociales básicos, orientados a brindar protección a la vida, a través de la provisión de alojamiento, abrigo, alimentación, atención básica en salud y servicios para la higiene personal y atención en calle. Igualmente son funciones privativas de las Municipalidades el desarrollo comunitario; y según su Ley Orgánica están llamados junto a otros actores del Estado, a realizar funciones relacionadas con educación, salud, deporte y recreación y actividades de interés común.

**Décimo Cuarto:** Que al ser funciones propias, habituales y permanentes de la Municipalidad demandada ordenadas y reguladas por la normativa que la creó, y en ningún caso, accidentales o ajenas a ella, mal puede sostenerse que se trate de una relación contractual amparada por la norma aludida, resultando irrelevante lo señalado por el testigo don Mario Almonacid Paredes, en cuanto a que la ejecución del Programa se haya realizado vía transferencias de recursos de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, pues tal circunstancia le es inoponible al actor.

**Décimo Quinto:** Que, así las cosas, no enmarcándose la relación contractual dentro del régimen especial que contempla la Ley 18.883, debe concluirse que su contratación lo ha sido al margen de la legalidad. La ilegalidad de la actuación de la administración acarrea sin duda la nulidad de los actos o contratos, sin embargo, no es posible aplicar el efecto normal de la nulidad tratándose de prestación de servicios realizados a través del tiempo, en provecho de la administración y de buena fe por el funcionario. Entonces, surge la necesidad de aplicar un cuerpo normativo que permita amparar la prestación de



servicios, el que no es otro que el Código del Trabajo, como lo establece el artículo 1 del mismo cuerpo legal, y que consagra dichas normas como de carácter general y aplicables supletoriamente incluso a la administración del Estado cuando no existe una norma que regule la situación.

La sola circunstancia que la institución no pueda contratar en virtud de las normas del código del trabajo, no puede ser un motivo para aplicar de manera ilegal un estatuto que atendida las circunstancias de la prestación de los servicios es improcedente; máxime cuando la Administración puede externalizar la prestación de un servicio para cumplir sus fines y objetivos.

En consecuencia, al no tener aplicación el artículo 4 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y concurrir indicios propios del vínculo de subordinación y dependencia, corresponde concluir que entre el demandante y la demandada existió un contrato de trabajo.

**En cuanto a las indemnizaciones:**

**Décimo Sexto:** Que al haberse establecido que existió en la especie una relación bajo subordinación y dependencia entre las partes, regulada en consecuencia por la legislación laboral, debió ésta haberse finiquitado de la forma indicada en el Título V del Libro I del Código del ramo, y no como se hizo (mediante un correo electrónico sin justificación de la causal) lo cual supone necesariamente la existencia de un despido carente de causa legal, surgiendo así el derecho a cobrar la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización de perjuicios por lucro cesante por concepto de remuneraciones a que hubiere tenido derecho a percibir desde la fecha de su despido hasta la fecha de término del vínculo pactado en el contrato suscrito, esto es, desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2020, considerando como monto de la remuneración la suma de \$560.000 que mensualmente percibía el actor.

**Décimo Séptimo:** Que por otra parte al haberse acreditado que la relación laboral se inició el 01 de junio de 2020 y finalizó el 1 de septiembre de 2020, corresponde igualmente acoger la demanda interpuesta y condenar a la demandada al pago del feriado proporcional reclamado, por no haber acreditado su pago al término de vínculo contractual.

**En cuanto a la acción de nulidad del despido:**

**Décimo Octavo:** Que, en lo que se refiere a las remuneraciones demandada por aplicación de la sanción de la nulidad del despido ante el no pago de cotizaciones previsionales adeudadas, teniendo únicamente presente que este es un tema que se encuentra zajando por la Excma. Corte Suprema, excluyendo la aplicación de la sanción de nulidad del despido, en aquellos casos de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado, por estimar



que concurre un elemento que autoriza diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que en principio, les otorgaba una presunción de legalidad; posición que ha sido reiterada en una sentencia dictada el 24 de mayo de 2021, en causa Rol N° 23.062-19, se procederá al rechazo de esta acción impetrada.

Por estas motivaciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 1°, 7°, 8°, 162, 446, 425, 453, 454, todos del Código del Trabajo, SE DECLARA:

I.- Que **se acoge** la demanda interpuesta por el abogado don VICTOR MANUEL ACHIARDI LEON, en representación de don JOSE DANIEL CARCAMO FLOS, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, representada legalmente por su alcalde don GERVOY PAREDES ROJAS, declarando que existió una relación laboral entre las partes la que se inició 01 de junio de 2020 y que finalizó el 1 de septiembre de 2020 por despido indebido.

En razón de lo anterior la demandada deberá pagar al demandante las siguientes sumas de dinero:

- a. Feriado legal proporcional (5 días) la suma de \$116.666.-
- b. Indemnización sustitutiva del aviso previo, la suma de \$560.000.-
- c. Remuneraciones por los meses de septiembre y octubre de 2020, a título de lucro cesante en la suma de \$1.120.000.

II. Que las sumas antes señaladas deberán ser pagadas con los reajustes e intereses que establece el artículo 63 o 173 del Código del Trabajo, según corresponda.

III.- Que se rechaza en lo demás la demanda.

IV.- Que no se condena en costas a la demandada por estimar que ha tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese.

**Rit O-488-2020.**

Sentencia dictada por don **Moisés Samuel Montiel Torres**, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt

